



## Desafíos de la integración socio urbana y nacional

Desde el municipio Tafí Viejo a Buenos Aires sin escalas

*Challenges of socio-urban and national integration. From the municipality of Tafí Viejo to Buenos Aires without stopovers*

Paula L. BOLDRINI PERALTA<sup>a, b</sup> 

### Resumen

Se analiza una gestión municipal orientada a la integración de sectores vulnerables urbanos a la ciudad consolidada, en el marco de las políticas nacionales derivadas del Registro Nacional de Barrios Populares, y en articulación con sus propias iniciativas. Para su desarrollo se toma como caso de estudio el Municipio Tafí Viejo, localizado al noroeste del aglomerado Gran San Miguel de Tucumán. Su elección deviene de una activa política local para la mejora de barrios populares, constituyéndose la que mayor flujo de fondos movilizó para esto en toda la Provincia. Como resultado, se identifican logros y obstáculos a partir del análisis del proceso a diferentes escalas, local y nacional, que contribuye a profundizar la discusión acerca de las lógicas más profundas de la producción integrada del hábitat. Este trabajo busca problematizar las experiencias vividas en el marco de una política sin precedentes, que, por su carácter innovador, recibe una multiplicidad de elogios y críticas. Se identifican emergentes

<sup>a</sup> Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. [ROR](#)

<sup>b</sup> Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Argentina. [ROR](#)

✉ Boldrini Peralta: [pboldrini@herrera.unt.edu.ar](mailto:pboldrini@herrera.unt.edu.ar)

*Recibido:* 28 de octubre de 2024; *Aceptado:* 12 de marzo de 2025; *Publicado en línea:* 15 de noviembre de 2025.

Publicación del *Área de Estudios Urbanos*. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, Instituto de Investigaciones Gino Germani. ISSN-e: 2250-4060.

de discusión que contribuyan a la mejora de estas iniciativas, consideradas el camino indicado para el desarrollo sostenible del territorio y sus hábitats.

*Palabras claves:* Políticas públicas; Barrios populares; Integración; Participación.

### Abstract

Municipal management is analyzed aimed at the integration of vulnerable urban sectors into the consolidated city, within the framework of national policies derived from the National Registry of Popular Neighborhoods, and in coordination with its own initiatives. For its development, the Taí Viejo Municipality, located northwest of the Gran San Miguel de Tucumán agglomerate, is taken as a case study. Her election comes from an active local policy for the improvement of popular neighborhoods, becoming the one that mobilized the greatest flow of funds for this in the entire Province. As a result, achievements and obstacles are identified from the analysis of the process at different scales, local and national, which contributes to deepening the discussion about the deeper logic of integrated habitat production. This work seeks to problematize the experiences lived within the framework of an unprecedented policy, which, due to its innovative nature, receives a multitude of praise and criticism. Emerging topics of discussion are identified that contribute to the improvement of these initiatives, considered the indicated path for the sustainable development of the territory and its habitats.

*Keywords:* Public policies; Popular neighborhoods; Integration; Participation.

## Introducción

La Ley N° 27.453 está orientada a visibilizar y resolver el problema del hábitat de los sectores más vulnerables, a través de acciones de mejora sobre los asentamientos que conforman el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Durante el gobierno neoliberal desarrollado entre los años 2015 y 2019, esta política se institucionalizó, pero sin recursos ni operatorias asociadas. Hasta el siguiente período de gobierno nacional, que dispuso fondos para la resolución de una demanda social histórica, hasta ahora enfrentadas, mayormente, de manera sectorial y estereotipada (Ortiz Flores, 2002; Pelli, 1995).

A lo largo de ambos períodos, la provincia de Tucumán mantuvo un gobierno de corte peronista, en sintonía con el régimen nacional iniciado en 2019, al igual que el Municipio de Taí Viejo, bajo la misma gestión municipal desde el año 2015 y hasta 2023. A lo largo de este lapso, el municipio alcanzó diversos logros que lo han colocado en una posición ejemplificadora, y sus avances intentaron replicarse en otras administraciones. Sus resultados y aspiraciones excedieron la política netamente municipal,

integrando aspectos ecológicos y productivos, con un fuerte componente urbanístico entre los que se destaca la mejora de las condiciones habitacionales.

El presente artículo tiene por objetivo indagar y analizar el modo en que se desarrollan estas políticas orientadas a la mejora e integración de barrios populares en el municipio Tañi Viejo, reconociendo emergentes de discusión a distintas escalas, que permitan identificar obstáculos y fortalezas propias tanto de su dinámica interna y con el ámbito nacional.

## Antecedentes necesarios

La problemática del hábitat presenta profundas contradicciones al momento de su abordaje, dirimidas entre concepciones mecanicistas, con foco en la resolución material y estereotipada de las formas de habitar, y la producción social del hábitat, que incorpora a la mirada material, los aspectos intangibles y simbólicos, en una unidad indisoluble, en cuya naturaleza se configura la verdadera complejidad del habitar, según lo indica Ortiz Flores en el *sitio web* del MOI [LINK]. A esto se agrega, como plantea Hernández (2005), una separación entre las lógicas comunitarias y estatales dominantes, marcada por desencuentros y conflictos. Por su parte, la producción autogestiva del hábitat, propone y practica caminos innovadores que muestran la capacidad de las organizaciones de base para administrar y conducir procesos complejos, que superan aquellos llevados a cabo por los gobiernos, de visión sectorizada, reduccionista, fragmentaria y homogeneizante (ver también *sitio web* del MOI [LINK]).

En Argentina, los cambios en la implementación de las políticas habitacionales previas al período estudiado ya habían perseguido un avance cualitativo en materia de producción de hábitat. No obstante, estos esfuerzos no lograron revertir los criterios tradicionales de producción de vivienda estereotipada y la primacía empresarial, aun en el marco de mejoras de viviendas y barrios que suponían el desarrollo de procesos de participación social (Barreto et al., 2014). Estos cambios preveían la implementación de sistemas cooperativos de trabajo en la construcción de viviendas y barrios con el objetivo de disminuir la participación empresarial privada; no obstante, las empresas fueron las destinatarias principales de los fondos de construcción en vez de las cooperativas (Barreto et al., 2014; Gómez López et al., 2015).

El caso tucumano tiene su propio encuadre territorial, consecuente con los procesos de fragmentación nacional (Paolasso et al., 2019) que, hacia adentro, se replican con fuertes y persistentes desigualdades socioespaciales. El desmantelamiento de su estructura productiva de base azucarera en el período dictatorial ocasionó el fenómeno

migratorio que se reprodujo bajo las mismas lógicas en el resto del país, lo que impulsó la descampesinización y distribución poblacional concentrada en ciudades.

En este contexto ampliado, se conforma el aglomerado Gran San Miguel de Tucumán en la década de 1970, con el *boom* poblacional por migración interna y en ese mismo proceso, proliferan las primeras villas de emergencia. A lo largo de las tres décadas siguientes, los asentamientos informales solo tuvieron tibias intervenciones públicas sin modificar sus condiciones de vulnerabilidad. De hecho, solo se multiplicaron y redistribuyeron en función de nuevas lógicas asociadas a los intereses inmobiliarios, por lo que se concentraron —como en toda Latinoamérica— en las áreas de mayor contaminación ambiental y baja capacidad de soporte del suelo (Boldrini Peralta, 2018).

Fue a partir de las políticas impulsadas post estallido social, en el año 2003 —durante la etapa neodesarrollista—, que surgieron nuevas operatorias sobre los asentamientos informales. Aun así, en Tucumán, la mayor parte de los recursos siguió ejecutándose bajo las modalidades más ortodoxas de construcción de vivienda nueva y contratación de constructoras privadas, profundizando incluso la fragmentación socioespacial (Gómez López et al., 2015). La intervención estatal destinada a los sectores populares sin capacidad de pago fue escasa y se llevó a cabo mediante operatorias como el Programa Techo y Trabajo por cooperativas y el Programa de Mejora de Viviendas (PROMEVI), que actuaba sobre el déficit cualitativo en asentamientos. También se sostuvo el Programa Mejora de Barrios (PROMEBA), existente desde 1990, pero que recién logró activarse durante este período en la provincia, mediante una unidad ejecutora encargada de la regularización dominial y la dotación de infraestructura y equipamiento comunitario.

Estas operatorias resultan el antecedente más cercano a las que se implementan desde el año 2019 a través de la Secretaría de Integración Social Urbana (SISU), constituida como el brazo ejecutor de la Ley N° 27.453 bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Tal como señala Cravino (2021), fueron muchos los sectores que cuestionaron la naturaleza centralista de la ley, ya que las provincias y municipios tienen incumbencia sobre el ordenamiento de sus territorios, por lo que dicha centralización ralentiza las decisiones y —agrego de manera personal— es incapaz de dar cuenta de la diversidad de situaciones, obstáculos y recursos de cada territorio. Esto se profundiza con la concentración de poder y decisiones en Buenos Aires, y el manejo de los fondos mediante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

La SISU estuvo inicialmente bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. A poco de iniciarse la gestión de gobierno en 2019, se produjo su traslado al Ministerio de Desarrollo Social, que permitió capitalizar una amplia trayectoria de abordaje territorial concreto, pero sin herramientas especializadas en materia

de hábitat. Esta situación puso de manifiesto diferencias al interior del gobierno nacional en torno a las políticas públicas destinadas a la resolución de las necesidades comunitarias vinculadas al hábitat, abriendo un debate que se desarrolla más adelante en este artículo.

Este escenario se replica a diferentes escalas de gobierno, como en el caso del Municipio Tañí Viejo, donde fue la Secretaría de Promoción Social y Desarrollo Inclusivo, dedicada históricamente a la resolución de problemáticas alimenticias y emergencias sociales, la que asumió la tarea de diseñar y ejecutar un programa municipal para dar solución a la emergencia habitacional de orden cualitativo, en estrecha coordinación y vinculación con las operatorias inherentes al RENABAP. Las Secretarías de Obras Públicas y de Planeamiento Urbano se autorelegaron de esta tarea, asumiendo obras complementarias y planes de macro escala que poco incorporaron a los barrios populares.

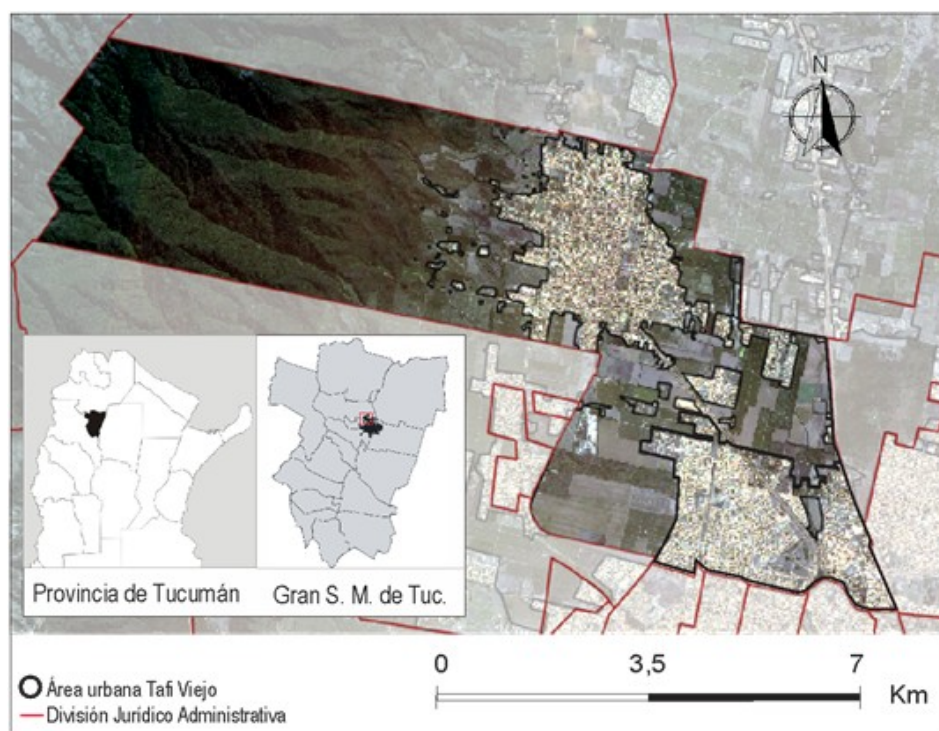
## El caso Tañí Viejo

El Municipio Tañí Viejo<sup>1</sup> está localizado al noroeste del aglomerado Gran San Miguel de Tucumán y constituye la administración metropolitana que más incrementó su área urbanizada en los últimos veinte años (Figura 1). Representa el 8,7 % de la superficie total del aglomerado y concentra el 6,3 % del total de la población metropolitana, con 56.400 habitantes. Se trata de una de las zonas con mayor vocación para la expansión, en tanto cuenta con extensas áreas de suelo vacante, en un territorio con elevada calidad ambiental (Malizia et al., 2018).

En sintonía con las políticas nacionales y provinciales, Tañí Viejo se mantuvo sin recursos significativos en materia de vivienda y hábitat destinada a sectores populares hasta el año 2015. Ese año, una nueva gestión municipal implementó medidas a partir de fondos propios que, a su vez, generaron mayores ingresos. Se destaca la instalación del Centro de Interpretación Ambiental y Tecnológico (CIAT) destinado a la separación, clasificación y revalorización de los residuos urbanos secos, con impacto en diferentes sectores del aglomerado GSMT. Este proceso genera productos que dan respuesta tanto al propio circuito de recuperación como a la elaboración de materiales utilizados en la mejora de viviendas, cartelería, e incluso biodiesel a partir de aceite reciclado,

---

<sup>1</sup>Su crecimiento y desarrollo estuvo ligado a la instalación de los Talleres Ferroviarios en 1910, en el marco del proceso de industrialización por sustitución de importaciones (Bazán, 1992). En 1980, luego de su etapa de esplendor, los talleres ferroviarios fueron cerrados por la última dictadura militar (Sosa Martos, 2015). El declive de la estructura productiva y economía local trajo aparejado el aumento del desempleo (Osatinsky, 2019) y el incremento del déficit habitacional.



**FIGURA 1.** Localización del Municipio Taquí Viejo en el aglomerado Gran San Miguel de Tucumán  
 Fuente: Imagen satelital: CBERS 4A – 10/03/2020. INPE, Brasil. Límites jurisdiccionales de la Dirección General de Catastro Tucumán

con el que funciona una flota de ómnibus que constituyen un circuito de transporte público interno denominado Ecobus, orientado a mejorar la conectividad del municipio. Esta lógica productiva se replica en otro nodo localizado en el edificio del ex Hogar Agromecánico, convertido en Complejo Ecoproductivo Municipal (CEM), que integra emprendimientos y capacitaciones ambientales, laborales y un albergue para mujeres víctimas de violencia. También una hostería y dos mercados municipales abandonados durante años, reabrieron sus puertas bajo la gestión municipal, tomando y capacitando mano de obra en un virtuoso circuito de reactivación económica interna.

Es en este contexto que se producen numerosas mejoras barriales, multiplicadas desde el año 2020 con fondos de la SISU, y en el marco de una operatoria local, diseñada desde la Secretaría de Promoción Social y Desarrollo Inclusivo en articulación con el equipo de vinculación tecnológica MHaPa, INTEPH, UNT-CONICET,<sup>2</sup> para conducir los procesos de integración socio-urbana.

## Encuadre teórico-metodológico y resultados de la investigación

La integración urbana resulta el eje de la cuestión a considerar. Tal como desarrollan Guevara, Marigo y Wallace (2018), constituye una comunión socioespacial construida a través de medidas que contemplan condiciones físicas: infraestructura, equipamiento comunitario, espacios productivos; simbólicas: fortalecimiento de lazos e identidades mediante la participación; y jurídicas: tenencia de la tierra y garantías de derechos; preferentemente en el marco de procesos de ordenamiento territorial, que cumplan progresivamente con los derechos económicos, sociales y culturales de cada comunidad y el conjunto social.

La integración, desde la perspectiva de las lógicas participativas, requiere la construcción de vínculos y objetivos comunes, en el marco de tareas con objetivos claros, manejo de recursos por parte de la propia comunidad y relaciones fundamentalmente dialógicas (Boldrini Peralta, 2015). Estas relaciones se producen en el ámbito intra-comunitario y en interacción con las esferas públicas de orden municipal y nacional que, hasta ahora, ponen las pautas estructurales y también a detalle, del modo en que deben ejecutarse las operatorias.

---

<sup>2</sup>Se trata de un grupo de investigadores, docentes, graduados y estudiantes autodenominado equipo de Mejora Participativa del Hábitat (MHaPa), pertenecientes al Instituto de Investigaciones Territoriales y Tecnológicas para la Producción del Hábitat (INTEPH), que se encuentran bajo la órbita de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

El poder público diseña y aplica un conjunto de normas y prácticas con el fin de pautar y promover a la población modos de resolución de necesidades sociales y gestión de los recursos públicos (Meny y Thoenig, 1992), mediante un conjunto de acciones, y omisiones, que evidencian la modalidad de intervención asumida desde el Estado (Oszlak y O'Donnell, 1995).

Según Dallorso (2012), las políticas públicas son el resultado de procesos abiertos y circunstanciales de ensamblaje o disposición de elementos que los exceden, pero que asumen una posición estratégica respecto del acontecimiento que se presenta como urgente. Propone indagar el cofuncionamiento de la macropolítica y la micropolítica, bajo una noción de Estado no monolítica, con la importancia de abordar los gobiernos locales como dimensión irrenunciable.

Reboratti (2001) explica que las escalas son una construcción social de sistemas que interactúan con diferentes dinámicas, cuyo encuentro depende de nuestra propia capacidad para encontrar conexiones y cruces. La escala es, para Reboratti, una herramienta primero conceptual y luego técnica, para aproximarse críticamente al conocimiento de la realidad.

El diálogo entre las escalas contribuye a comprender dinámicas que van desde la política nacional, que diseña la operatoria pública, hasta el territorio concreto en la que se ejecutan estas políticas, mediadas en este caso por la gestión municipal. En este atravesamiento de escalas el concepto de integración se sostiene como ideal, en tanto que el registro abarca por primera vez la totalidad del territorio nacional, hacia un lenguaje común orientado a visibilizar y abordar la problemática de la pobreza urbana. No obstante, entre la instancia nacional y el barrio, existen concepciones que se ponen en juego, se enfrentan, adaptan o dialogan, como veremos en este artículo.

El desarrollo de la investigación utiliza una estrategia cualitativa, habilitada por un trabajo mancomunado entre el Municipio y el MHaPa, a partir de un convenio de colaboración entre las partes. Este convenio formaliza el acompañamiento del equipo académico al diseño y ejecución de políticas orientadas a la mejora de barrios populares en un sentido amplio, e incluye tanto tareas conjuntas de relevamiento sociohabitacional a través de encuestas sociales (Neiman y Quaranta, 2006; Yuni y Urbano, 2014), la elaboración de mapas cualitativos (Malizia et al., 2021), entrevistas semiestructuradas a funcionarios, técnicos y vecinos, así como la observación participante de los diferentes pasos dados en territorio, el acceso a la documentación, reuniones internas y de coordinación con los referentes de la SISU, y el establecimiento de espacios de discusión hacia el interior del equipo técnico municipal, coordinados por el grupo académico, destinados al balance y diseño de acciones a corto, mediano y largo plazo. Todo esto permitió ver en funcionamiento el entrecruzamiento del ámbito barrial,

municipal y nacional, entendidos como dimensiones de análisis, que se replican en la organización de los resultados de investigación:

En primer lugar, la macro y mesoescala, que atañe al diálogo entre nación y municipio, explica los esfuerzos locales por adoptar y adaptar las operatorias diseñadas en el ámbito nacional, poniendo en discusión disposiciones nacionales que condicionan la ejecución local. Le sigue el abordaje socioespacial del problema, que redundó en la discusión acerca de polígonos que demarcan los barrios populares y las estrategias de promoción pública local como instrumento.

En segundo lugar, la microescala permite analizar las dinámicas sociocomunitarias en relación con la gestión municipal y el cumplimiento de los objetivos del programa. Se revisa el *modus operandi* de la operatoria local, su articulación con las operatorias nacionales como recurso en el conjunto de casos ejecutados, dentro de los cuales se señalan emergentes explicados a partir de dos experiencias: los barrios José Colombres y La Toma.

## La macro y mesoescala

### Disposiciones nacionales que condicionan la ejecución local

Como se dijo, inicialmente las políticas vinculadas con la producción del hábitat estaban bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. Este espacio ostentaba los nuevos modos de comprender la producción del hábitat, diferenciándose de las perspectivas enfocadas exclusivamente en la resolución de la vivienda que —en la teoría y en el discurso— se encuentran superadas. Su estructura organizativa contaba con cinco áreas: Administrativa; Política de Suelo y Urbanismo; Política de Vivienda e Infraestructuras; Gestión y Articulación de Programas Populares; e Integración Socio Urbana (SISU). Es esta última la que concentraba la mayor parte de los recursos destinados a afrontar la mejora de los barrios populares del RENABAP, con una activa presencia y participación de las organizaciones sociales que impulsaron la ley, nucleadas en la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), y Barrios de Pie, junto a organizaciones no gubernamentales como Cáritas y TECHO.

No obstante, este esquema sufre una vertiginosa ruptura en su estructura organizativa, como resultado de conflictos en torno a los desalojos de barrios populares suscitados durante el año 2020. Los postulados sostenidos por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat fueron considerados por los movimientos sociales como guiños a la preservación de la propiedad privada (*Clarín*, 17 de septiembre de 2020), en detrimento

de las medidas autogestivas llevadas adelante por los sectores populares para resolver sus necesidades de vivienda.<sup>3</sup> Este hecho puso en evidencia algunas de las contradicciones internas de este Ministerio y del propio gobierno nacional. Después de este suceso se producen cambios que devienen en el traslado de la SISU al Ministerio de Desarrollo Social.

En Tucumán, aun sin la presión de los movimientos sociales, esta situación se reproduce hacia el interior del Municipio Tañi Viejo donde la secretaría de Promoción Social y Desarrollo Inclusivo (SPSyDI) es la que asume la gestión de la integración sociourbana y la articulación con la SISU a nivel nacional. Los movimientos sociales en Tucumán tienen su principal ámbito de acción en el interior de la provincia, asociado a los trabajadores desocupados que permanecen vinculados con la producción de caña y limón. En el aglomerado GSMT, el movimiento con mayor incidencia en políticas de hábitat es el Frente Popular Darío Santillán que, si bien tuvo un rol protagónico durante el relevamiento realizado en 2015, no emprendió obras de mejora significativas asociadas a la SISU en la provincia.

La SPSyDI de Tañi Viejo fue la primera y más prolífica unidad ejecutora de estas operatorias durante el período 2019-2023 en Tucumán. Organizó su tarea en tres líneas de emergencia: Alimentaria, Ocupacional, y Habitacional (Boldrini Peralta et al., 2021). Desde esta última se impulsó la implementación de los proyectos y obras con la SISU, a través del Programa Integral de Mejora del Hábitat Social (Figura 2).

### Abordaje socioespacial del problema

El relevamiento nacional de barrios populares se realizó bajo una estructura organizativa centralizada en la provincia de Buenos Aires, bajo la tutela, fundamentalmente, de la organización TECHO, que articuló la tarea con las organizaciones sociales bajo un criterio de identificación común basado en la carencia de tres servicios básicos e irregularidad en la tenencia de la tierra. Para su reconocimiento en la Provincia de Tucumán, no fueron consultadas instituciones dedicadas a esta problemática como la Universidad, CONICET, o el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Este último mantenía un registro actualizado de asentamientos informales hasta el año 2014.

En la Figura 3, puede verse una diferencia significativa entre los 242 asentamientos informales relevados por el IPV hasta el año 2014 —identificados en función de carencias de infraestructura, irregularidad dominial y problemáticas ambientales reconocidas

<sup>3</sup>La toma del Guernica fue un proceso de toma de 200 hectáreas por parte de 2000 familias, que fueron desalojadas en un confuso procedimiento en el que existían instrumentos legales para formalizar y consolidar de manera ordenada la ocupación (Durante et al., 2022).



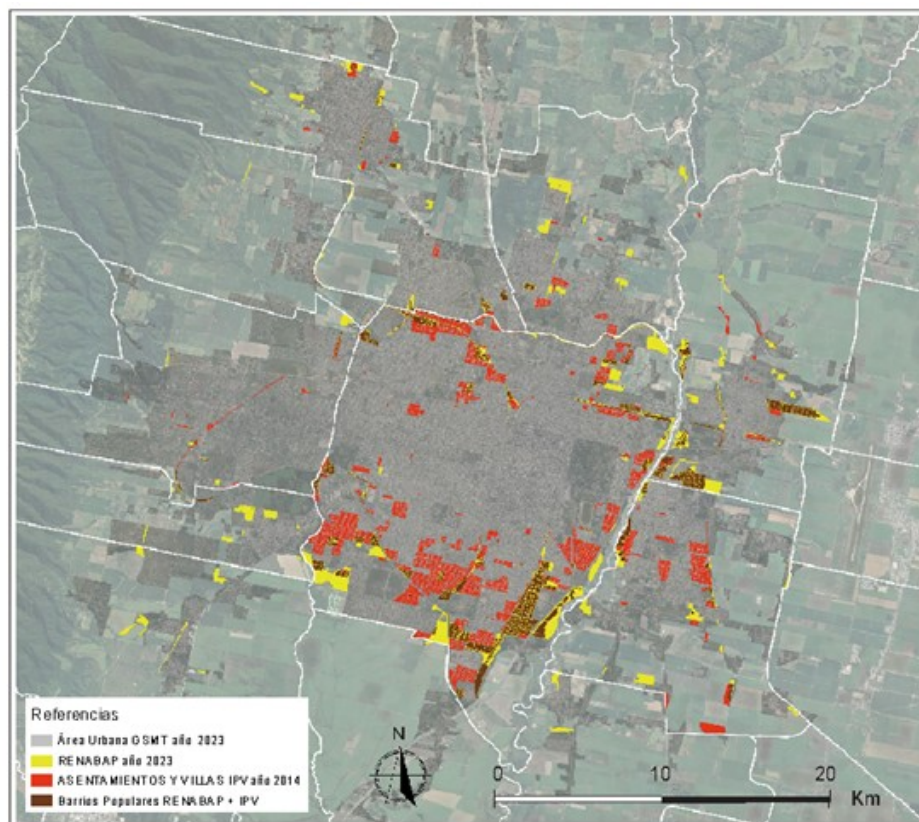
**FIGURA 2.** Actores sociales intervinientes en la mejora integral del hábitat municipal

Fuente: Boldrini Peralta, Malizia, Ortega (2021)

en los trabajos de campo institucionales—y el RENABAP, con 199 barrios populares en su última actualización 2023. Un subregistro de 43 casos solo para el GSMT.

Caben estudios específicos acerca de las variables utilizadas en cada caso y la rigurosidad y pertinencia de unas y otras. Tal como se plantea en investigaciones sobre el aglomerado cordobés, resulta evidente la persistencia de dificultades para visibilizar la complejidad de las situaciones de informalidad (Elorza et al., 2019). El sentido que tiene el señalamiento en esta investigación reside en mostrar la desconexión institucional entre organismos nacionales y provinciales. Los relevamientos nacionales desatendieron los registros locales existentes en todas sus ediciones, ya que no se establecieron vínculos institucionales con los organismos que llevaban adelante tareas afines, desestimando sus aportes y desarrollos.

Las operatorias se mantuvieron bajo el control de las organizaciones sociales y no gubernamentales que impulsaron la ley, lo que garantizó un sentido general de visibilización e intervención orientada a la integración (Miño et al., 2023). No obstante, se pasó por alto el aprovechamiento minucioso de una larga trayectoria de políticas denominadas alternativas (Romagnoli y Barreto, 2006) que existieron en forma modesta pero permanente hasta el año 2003, y reforzadas luego, hasta el año 2015. Estas últimas arrojaron aprendizajes significativos en el trabajo con cooperativas de trabajadores desocupados provenientes de movimientos sociales, como se hizo desde el programa Techo y Trabajo; o las mejoras en viviendas precarias, como las que se hicieron mediante el PROMEVI; o los procesos participativos reajustados en las diferentes etapas



**FIGURA 3.** Diferencias en el registro de asentamientos y barrios populares en el GSMT

*Fuente:* Elaboración área cartográfica INTEPH en base a imágenes satelitales Landsat 2024, Asentamientos informales registrados por el Instituto Provincial de Vivienda de la Provincia de Tucumán (2014), barrios populares del Registro Nacional de Barrios Populares (2023)

desde los equipos técnicos del PROMEBA.

Por ejemplo, en el caso del PROMEVI, uno de los principales obstáculos para cumplir los objetivos planteados de mejora de viviendas incompletas o precarias, fue la falta de financiamiento para los técnicos proyectistas de estas mejoras. Por lo que la ejecución terminó por ajustarse a prototipos de ampliaciones, desperdiciando las posibilidades de diseño participativo y de esta forma, de obtener mejoras más apropiadas para cada familia y mayor aprovechamiento de los recursos. En el mismo sentido, la precariedad con la que trabajaron los técnicos del PROMEBA, junto a otros factores vinculados a la falta de formación profesional en materia de metodologías participativas, impidió desarrollar procesos participativos como se lo proponía el Programa (Boldrini Peralta, 2012). En ambos casos, las observaciones responden al análisis de experiencias en la Provincia de Tucumán, aclaración necesaria ya que, sobre todo el PROMEBA, tuvo una amplia diversidad de resultados en el país.

Esto abre una discusión acerca del proceso de diseño y ejecución de las nuevas operatorias, que expresa las dificultades para articular diferentes sectores sociales imprescindibles en la gestión apropiada del territorio. Aunque aún minoritarios, existen grupos académicos y equipos institucionales con anclaje territorial que sostienen prácticas alternativas que deberían tener un espacio en el montaje de estas políticas. Estas consultas y articulaciones fueron tenidas en cuenta solo para la provincia de Buenos Aires, donde se concentró lo que Miño y Carrara (2023) denominaron el “primer anillo”, la mesa política que impulsó el proyecto. Sin embargo, nuestro país presenta una composición más extensa que quedó contemplada en lo que las autoras denominan un segundo y tercer anillo, con tareas operativas, e indefectiblemente supeditadas a la definición de políticas dirigidas desde Buenos Aires. Por ende y una vez más, los recursos del interior del país tales como datos, experiencias y recursos humanos comprometidos con la cuestión, quedaron relegados.

Ya para la gestión y ejecución concreta, la tarea de coordinación quedó en manos de personal elegido por afinidad política, dejando al componente técnico en un plano secundario o directamente soslayado. Y aquí se abre otra discusión, referida a la calidad técnica, que constituye un *cuello de botella* frecuente en este tipo de políticas alternativas. Resulta imprescindible discutir y mejorar la formación necesaria para el acompañamiento de estos procesos, el espacio y rol de los profesionales —de diversas disciplinas— en el diseño, ejecución y reelaboración teórica de las políticas públicas para su ajuste permanente.

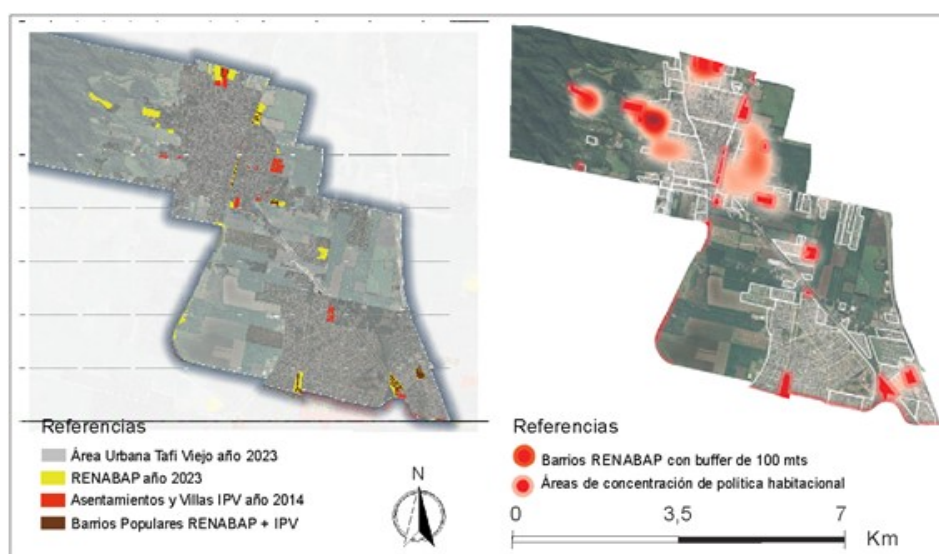
## El programa local

El Programa Integral de Mejora del Hábitat Social (PIMHa) se formaliza en el 2020, para resolver las necesidades habitacionales de los sectores vulnerables y servir de estrategia de integración de los mismos con las áreas consolidadas de la ciudad. El Programa incluye cuatro líneas de acción destinadas a resolver diferentes necesidades complementarias: (a) Inclusión Territorial de Viviendas Nuevas (ITVN), para la emergencia habitacional y relocalización; (b) Mesa de Acompañamiento Técnico-profesional (MAT), como servicio vecinal permanente, bajo una coordinación interbarrial y con el área de planificación urbano territorial. Se trata de una estrategia inspirada y confluente con la propuesta de la *Ley de Acompañamiento Técnico Público*, diseñada y promovida por Habitar Argentina [[LINK](#)]; (c) Habitar Vivienda Tañi Viejo (HA.VI.TA.); y (d) Hábitats Participativos (HA.PA.), para mejoras integrales de viviendas y equipamiento y servicios comunitarios respectivamente, en articulación con los equipos técnicos de la MAT.

El PIMHa contempla la totalidad de las áreas urbanas en condiciones de vulnerabilidad. Algunos barrios forman parte del RENABAP y otros no, incluso varios de ellos fueron construidos mediante obra pública, cuya falta de terminación y/o nivel de deterioro, mantienen a su población en condiciones de vulnerabilidad.

En la [Figura 4](#) se muestran condiciones socio espaciales de vulnerabilidad, identificadas a partir de la localización de distintos tipos de obras ejecutadas desde el PIMHa. En el mapa se conforman zonas de calor por concentración de puntos que representan la intensidad de demandas recibidas. Los límites de estas áreas se han difuminado, en tanto se entiende que el problema no se circunscribe a un sector delimitado taxativamente.

Las áreas vulnerables registradas desde el organismo municipal coinciden y exceden a las del RENABAP, buscando superar el uso de polígonos, así como las variables utilizadas para el registro, cuestionado desde el interior del equipo técnico municipal y académico. La restricción espacial del RENABAP discrepa de los criterios de abordaje local, que requiere de áreas más amplias para trabajar la integración de estos barrios. Durante los procesos desarrollados se suscitaron una serie de dificultades a partir de esta limitante espacial, tales como: la exclusión de los vecinos inmediatos de cada barrio registrado, para ser incorporados formalmente en los procesos participativos como parte de los esfuerzos de integración; la necesidad de proyectar y ejecutar obras de infraestructura de mayor envergadura que quedaban fuera de los polígonos y, por lo tanto, del procedimiento y respaldo institucional ligado a la SISU; la imposibilidad de contar con suelo, equipamiento comunitario y espacio público circundante como parte de los recursos incluíbles en los proyectos de reurbanización.



**FIGURA 4.** Localización de áreas urbanas vulnerables en el municipio Tafí Viejo

*Fuente:* Elaboración cartográfica INTEPH para el PIMHa, en base a imágenes satelitales Landsat 2024, Asentamientos informales registrados por el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Provincia de Tucumán (2014), barrios populares del Registro Nacional de Barrios Populares (2023), y operatorias públicas ejecutadas por el Municipio de Tafí Viejo (2015-2023).

En este sentido, el registro municipal es más amplio que el RENABAP. Se identifican como “áreas vulnerables de intervención prioritaria” y se encuentran en proceso de formalización para ser incluidos en el código urbanístico, en el marco de un trabajo mancomunado entre el Concejo Deliberante, el poder ejecutivo y el equipo académico del MHaPa.

Asimismo, la selección de los barrios donde priorizar la intervención depende de la posibilidad de apoyarse en una organización vecinal básica o consolidada, en la que se validan grupos o personas portadoras de cierto grado de aceptación comunitaria, que permitan interactuar con la institución con una perspectiva participativa. Esto conlleva el acompañamiento a sus demandas iniciales, frecuentemente asociadas al espacio público y la dinamización productiva, ambas tenidas en cuenta en el diseño del programa local.

## La microescala

### Modalidad de intervención del Programa Municipal

El Programa local motoriza las principales iniciativas, acciones y estrategias implementadas en materia de hábitat popular. Su estructura interna permite incluir la ejecución de diversas operatorias como las inherentes al RENABAP o al PROMEBAP.

La intervención a través de este programa se inicia en el barrio 3 de Marzo, construido por el IPV en la década de 1990. Con el acompañamiento del equipo académico MHaPa, se emprendió la elaboración de un mapa cualitativo, como estrategia de reconocimiento y vinculación entre técnicos y comunidad, dando lugar a la implementación del proyecto HA.PA. para la mejora del espacio público. No obstante, las perspectivas de trabajo se redujeron debido a la falta de financiamiento, ya que todos los recursos fueron orientados a los barrios incluidos en el RENABAP. De esta forma, una activa demanda comunitaria y consecuente participación en las actividades propuestas —condición considerada decisiva para el inicio de un proceso participativo—, fue desaprovechada por la necesidad de orientar los esfuerzos al RENABAP.

Esta situación se replica en otros barrios en los que se ejecuta el HA.VI.TA. dedicado a la elaboración de mejora de viviendas con diseño participativo para la ampliación y refacción de viviendas unifamiliares, teniendo en cuenta recursos materiales disponibles y capacidades técnicas para aprovechar materiales producidos por el CIAT, pero sin mayores proyecciones por falta de financiamiento.

De esta forma, desde el municipio se decidió focalizar la tarea a los barrios incluidos en el RENABAP, en los que, si bien no había condiciones sociales previas de trabajo para el abordaje y dinamización de procesos con participación comunitaria, existían fondos disponibles que fueron los que finalmente definieron el orden de intervención.<sup>4</sup> La falta de vínculos habilitantes para la tarea, sumado al contexto de pandemia del COVID-19, obligó a avanzar con proyectos estereotipados de vereda y arbolado, desconociendo las demandas propias de cada comunidad, ya que las opciones predeterminadas por la operatoria permitían acelerar los procedimientos administrativos para el inicio de obras, pasando por alto valiosas etapas de participación (Boldrini Peralta, 2012).

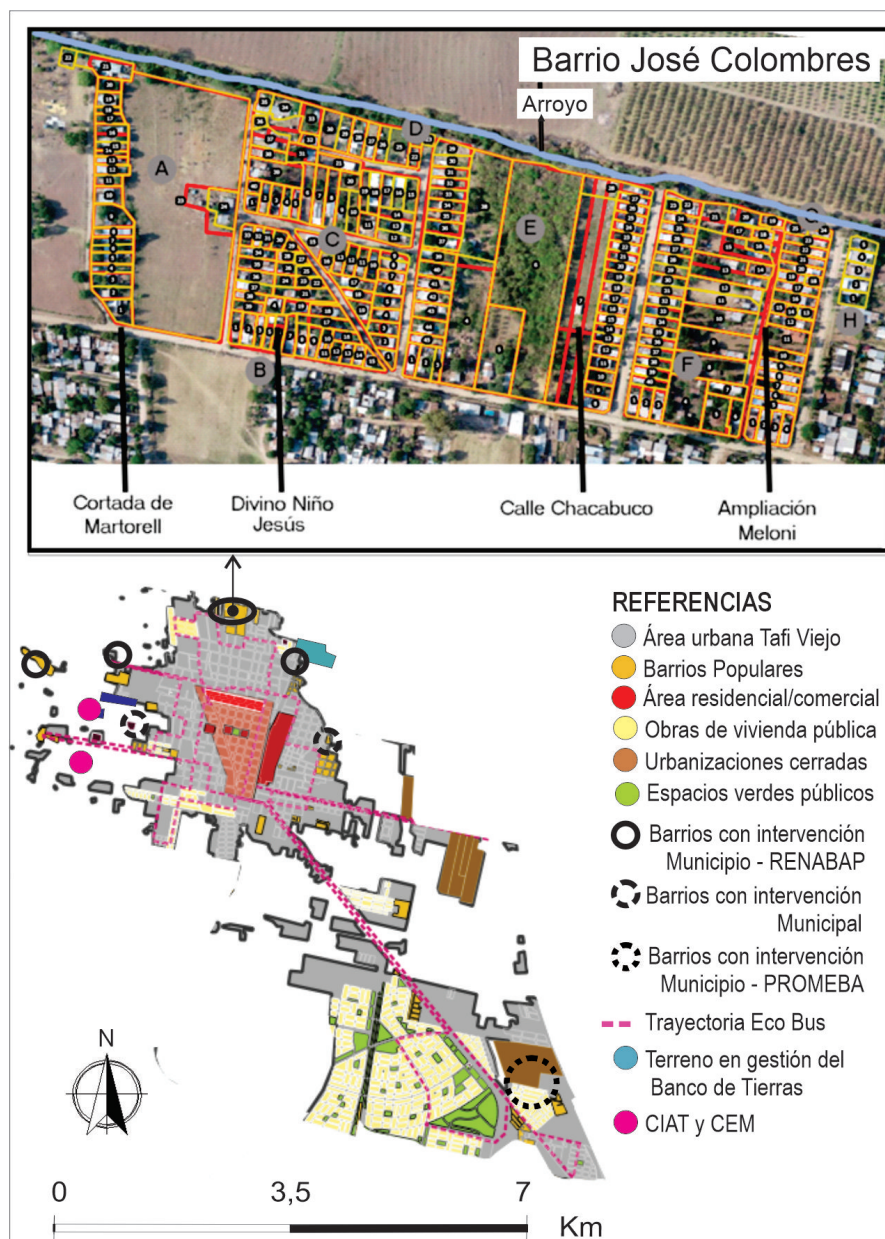
### El caso José Colombres, adaptación y ensamble

Para explicar diferentes emergentes propios de la última escala de acción concreta en territorio, se aborda un caso denominado José Colombres, en coincidencia con el nombre de la calle que une los tres barrios abordados: Cortada de Martorell, Divino Niño Jesús y Ampliación Meloni. Se encuentran localizados en el periurbano del municipio Taí Viejo (Figura 5), asociado a la producción limonera dominante en el municipio.

Las acciones de la SISU, por su parte, se inician con Programas de Obras Tempranas (POT), que consisten en el diseño y ejecución de una obra barrial destinada a conexiones domiciliarias, salón de usos múltiples, playón deportivo y/o veredas y arbolado. Estas cuatro opciones pueden seleccionarse de a una en función de las condiciones del barrio y sirven para dar inicio a obras de mejoras urgentes; y Proyectos Ejecutivos Generales (PEG), destinados a desarrollar el programa integral de mejoras necesarias, incluye relevamientos sociohabitacionales, estrategias de participación como los mapeos colectivos y el armado de un proyecto general, sin restricciones. Los primeros están orientados a resolver a corto plazo necesidades puntuales de infraestructura y equipamiento comunitario, y al mismo tiempo, generar condiciones para la implementación de los PEG, que incluyen obras de mayor envergadura destinadas a la mejora integral del hábitat.

En José Colombres, la capacidad de acción municipal y la confianza establecida con la SISU, permitió avanzar con un formato inusual, denominado “pre-PEG”, con el objetivo de generar las condiciones sociales habilitantes para el desarrollo de un proyecto comunitario y participativo del barrio y, de esta forma, superar el riesgo de diseño prototípico del proyecto barrial.

<sup>4</sup> En el momento de ensamble pleno entre el municipio y la SISU, se desarrolló un relevamiento de cada uno de los barrios pertenecientes al RENABAP, a fin de prever sus condiciones generales, planificar el tipo y momento de abordaje, así como la incorporación de nuevos barrios que forman parte de las áreas de atención prioritaria, en tanto cumplían con los requisitos del Registro.



**FIGURA 5.** Barrio José Colombres

*Fuente:* Elaboración área cartográfica INTEPH en base a imágenes satelitales Landsat 2024, Ortofoto y loteos Municipio de Tafí Viejo

Una acción clave de las operatorias PEG consistía en el relevamiento sociohabitacional que, en el caso del barrio José Colombres, logró desarrollarse fuera del modelo de la SISU, que utilizaba plataformas de relevamiento diseñadas en la oficina central. En este caso, el equipo académico recibió las demandas de información de las diferentes áreas municipales, con las que se diseñó un instrumento único de relevamiento, que se probó en territorio en el marco de la capacitación de los técnicos municipales para la tarea. Se ejecutó la encuesta al 100 % de las familias de los diferentes barrios, generando una base de datos común, disponible para el municipio y el equipo académico. El instrumento, a su vez, siguió disponible para otros barrios, sujeto a adaptaciones menores.

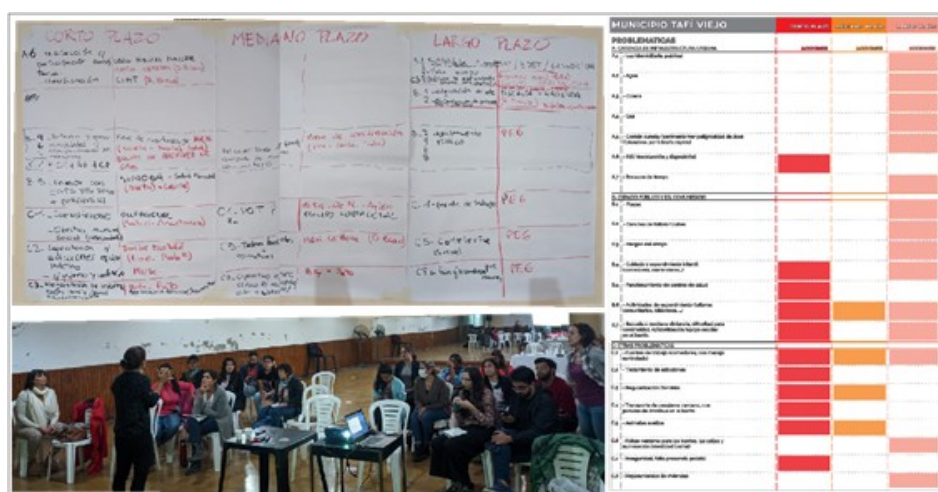
El pre-PEG incluyó este primer relevamiento sociohabitacional y la elaboración de los mapas cualitativos que alcanzaron a construir los consensos básicos para el proceso participativo. Esto permitió poner en común la información dentro del barrio, la construcción de vínculos habilitantes con los profesionales para el desarrollo de la tarea, y los estudios técnicos de base para emprender el proyecto barrial.

Los vínculos que se señalan requieren de la mutua representación interna entre vecinos y técnicos (Boldrini Peralta, 2011). Se basa en la credibilidad entre las partes, a partir del cumplimiento progresivo de acuerdos. Para eso, resultó clave la instancia de mapeo cualitativo que permitió identificar y jerarquizar problemas colectivamente, ordenados en un cronograma consensuado entre técnicos y comunidad, en función de los recursos disponibles. Asimismo, este plan de acción u hoja de ruta pautado entre comunidad y municipio (ver Figura 6), se monitoreaba con el grupo académico mediante reuniones-taller de seguimiento con el equipo técnico municipal, identificando obstáculos y ajustando las estrategias de abordaje trimestralmente.

Esta experiencia sobresale principalmente por la adaptación local realizada sobre la operatoria, así como la dinámica colaborativa alcanzada entre los equipos municipales y académicos. De esta forma, se reelaboraron conceptos, ajustaron medidas y consolidaron el objetivo, carácter y modalidad de trabajo de los grupos.

## Reflexiones finales

Gracias a los históricos y colectivos esfuerzos por formular y ejecutar leyes y operatorias como las que impulsan y resultan del RENABAP, es posible dar saltos cualitativos en materia de políticas de integración socioespacial. Esto, y las mejoras concretas realizadas a lo largo y ancho del país, constituyen el mayor impacto y fortaleza a señalar. Resulta difícil pensar en regresar atrás en materia de mejora del hábitat, habiendo dado este salto cualitativo mediante políticas alternativas de gran envergadura, la



**FIGURA 6.** Hoja de ruta en función del mapa cualitativo intra e interbarrial

Fuente: Base de datos del equipo de trabajo conformado por técnicos de la Municipalidad de Taí Viejo y el Equipo de Vinculación Tecnológica MHPA (UNT-CONICET).

puesta en funcionamiento de una estructura nacional con un mismo objetivo, y la articulación entre demandas y luchas sociales que alcanzaron a institucionalizarse.

Es evidente que, sobre tamaña experiencia, se abren múltiples reelaboraciones posibles, algunas de las cuales se buscan poner en discusión desde este trabajo, dejando cuatro emergentes más significativos a señalar: la calidad y magnitud de la búsqueda de integración; el desafío de un proceso de participación plena; las lógicas e ideologías puestas en juego en las políticas de gobierno y, por último, el lugar de la formación, atravesada por estas ideologías.

En cuanto al primer aspecto, resulta imprescindible perseguir que la integración trascienda escalas y ámbitos. Si se plantea y respeta como lógica estructural, deben confluir actores de todo el país con decisión técnico-política en la mesa nacional, acordando tecnológicas organizativas y de gestión. De lo contrario, se refuerza un centralismo que fragmenta, a partir del cual es difícil pensar en una política nacional con perspectiva integradora. Este obstáculo pudo salvarse parcialmente en Taí Viejo, un municipio fuerte con una gestión ágil, supeditando las operatorias nacionales a su programa de hábitat local.

Integrar conlleva respeto por la diversidad, en lugar de la homogeneización de, por ejemplo, perspectivas y variables de identificación de la pobreza urbana. Asimismo, la implementación de relevamientos centralizados también obtura la posibilidad de trabajo local en este sentido, en lugar de la adaptación de preguntas y ampliación de

demandas sobre una base común. El problema continúa cuando, aun esgrimiendo la lógica participativa, se formulan prototipos productivos, de equipamiento comunitario y ampliaciones de vivienda, reemplazando la oportunidad de desarrollo de procesos participativos hacia el interior de cada comunidad y, a la vez, enlazados a una proyección hacia otras escalas que permitan pensar en el ordenamiento sostenible del territorio. Tal como plantean Kaminker y Velásquez (2015) en su estudio del PROMEBA en el sur del país, si estas intervenciones están escindidas de una planificación que transforme y prevenga las verdaderas causas de la informalidad, se repite el ciclo de crecimiento que derivó en que esa población se tornara elegible para la intervención de un programa localizado de mitigación de la pobreza. Incluso el hecho de concentrar el interés casi exclusivamente en áreas urbanas, tal como se orienta desde los paradigmas actuales de la globalización (Marengo y Elorza, 2009), supone ya un constreñimiento de proyectos y acciones hacia solo una porción de territorio, en lugar de considerar un tablero de situaciones y posibilidades completo. Se vuelve imprescindible un plan que tenga, como fin último, impulsar una nueva estructura productiva que garantice condiciones de vida digna para toda la población, en la totalidad del territorio.

Sin duda, pensar en políticas integrales de ordenamiento territorial que deriven en operatorias flexibles y adaptadas a cada medio es no solo costoso, sino riesgoso en un contexto político tan cambiante como el argentino. Sin embargo, resulta imprescindible formular estas instancias, dotar de recursos para lograrlo y contar con un banco de prototipos de referencia y salvataje solo en casos de emergencia.

La participación, anudada a la cuestión de la integración, tendrá instancias de maduración que pueden ser contempladas en las políticas de producción del hábitat. Existen organizaciones, instituciones y, por ende, potenciales unidades ejecutoras con condiciones suficientes para llevar adelante estos procesos con mayor despliegue. Parte de la operatoria podría incluir la identificación y habilitación de estas instancias diferenciales de gestión de los recursos públicos.

Los referentes provinciales de las nuevas operatorias —en este caso de la SISU en la provincia— deben contar con formación apropiada y conocer los actores locales capaces de cooperar en las distintas experiencias. Si bien fue una fortaleza contar con coordinadores y referentes regionales y provinciales, la selección de los mismos en Tucumán estuvo basada exclusivamente en la afinidad partidaria. Desconocedores de las metodologías específicas de estos procesos, más de una vez constituyeron obstáculos en el desarrollo de la tarea, con el consecuente debilitamiento de las intervenciones. Se trata entonces, de buscar la sinergia equilibrada de ambos requerimientos.

Diseñar y ejecutar una política pública nacional requiere de mesas de trabajo local que incluyan la multiplicidad de actores que trabajan en el tema, generando un espacio

integrado a través de recursos que les permitan articular, y no competir, con diferentes roles en un camino compartido.

Asimismo, se ve como una fortaleza que el área de desarrollo social tenga un papel protagónico en este tipo de políticas. No obstante, en el caso de Tafi Viejo, resultó un obstáculo su disociación con el área de obras públicas abocada a la ejecución de obras en el plano material, y la oficina de planificación orientada al desarrollo de los nuevos proyectos —generalmente de gran envergadura— en terrenos vacantes. Se expresa aquí la desarticulación de un conjunto indivisible de políticas, con la persistencia de perspectivas aún ligadas a una producción del hábitat sin participación social, alejadas del complejo arte de habitar. Aquí está la contradicción entre mundos que también deben *integrarse* para dar un salto cualitativo en materia territorial.

Por último, la cuestión de la formación profesional, compleja, amplia y profunda resulta un desafío frente a los modelos dominantes que han acuñado conceptos de hábitat y participación alienantes. Aquellos que se animan a transgredir el *estatus quo*, circulan entre los mundos técnico-académico y político-militante, presionados por las condiciones de precarización de un lado, y la ofensiva ideológica por otro respectivamente.

En el mes de marzo del año 2021, el dirigente Juan Grabois visitó la provincia de Tucumán y participó de una mesa panel en la que expresó con nitidez este debate. El referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y también de las políticas diseñadas y ejecutadas desde la SISU, manifestó haber solicitado a la Universidad de Buenos Aires que proveyera estudiantes y docentes para el armado de las carpetas técnicas, sin haber recibido respuesta. Asimismo, declaró como un hecho frustrante que, con más de 200 barrios populares en la Provincia de Tucumán, solo hubiera siete carpetas de POT iniciadas, cuestionando directamente el compromiso universitario.

En esta idea subyace una posición invisibilizadora del valor del trabajo profesional. El armado de los POT se desarrolló en forma completamente gratuita, salvo las instituciones que conforman equipos técnicos con este fin, en donde se hizo en forma precarizada. El armado de cada carpeta técnica traía aparejado un trabajo técnico-administrativo de entre 20 y 40 días, de acuerdo con la complejidad del formato elegido, acompañada de una extensa y compleja documentación institucional: dominial, factibilidad de servicios, no inundabilidad y planialtimetrías.<sup>5</sup> En el caso de los PEG, es

<sup>5</sup> Esta documentación depende de vuelos de drones especiales para esa tarea, bajo supervisión de agrimensores. Asimismo, se requieren ingenieros para cálculos de estructuras de las obras principales y complementarias, cuando es necesario incorporar puentes y otras variantes de mayor complejidad; así como profesionales de la arquitectura para la elaboración de los proyectos participativos, planos de obras y cómputos, y profesionales de otras áreas sociales que completen el equipo para llevar

aún más dificultosa la producción de la documentación solicitada, resultando en un horizonte inalcanzable para organizaciones sociales, comunas y municipios pequeños. Para contrarrestar o morigerar esto, algunas provincias constituyeron mesas de gestión intersectoriales a fin de colaborar con esta etapa previa. Ese no es el caso de Tucumán. Asimismo, se han generado desde la SISU oficinas regionales que atienden, a distancia, las carpetas de otras provincias, sin conocer los barrios.

En relación con esto, reconocidos espacios como la Red Universitaria de Cátedras de Vivienda y Hábitat (ULACAV) y Habitar Argentina, han sostenido conversaciones y elevado propuestas formales a los Ministerios de Hábitat, Desarrollo Social y particularmente la SISU, planteando la necesidad imprescindible de conformar equipos técnicos-administrativos locales, remunerados y apropiadamente formados para estas tareas. Estas propuestas fueron infructuosas y el problema se constituyó como *cuello de botella* para reunir a los barrios con los recursos humanos destinados a su integración y consolidación.

Esta insolvencia es una de las razones por las que este perfil profesional resulta insustentable en el modelo dominante actual, y seguirá formando parte de una práctica fundamentalmente militante de pocos técnicos que desempeñan esta tarea en forma paralela a sus trabajos rentados.

Como pregunta para el cierre propongo ¿Por qué no priorizar el financiamiento de los procesos autogestionarios del hábitat existentes? Los fondos nunca son suficientes para abarcar la demanda cuantitativa y cualitativa total, entonces podríamos empezar por aquellos espacios que detentan ya una organización capaz de motorizar procesos participativos y, desde allí, promover esta lógica como requisito de financiamiento y promoción de nuevas iniciativas.

### Declaración de contribuciones de autoría (CRedit)

**Boldrini Peralta:** Conceptualización (Conceptualization); Curación de datos (Data curation); Análisis formal (Formal Analysis); Adquisición de Financiamiento (Funding acquisition); Investigación (Investigation); Metodología (Methodology); Administración de proyecto (Project administration); Recursos (Resources); Software (Software); Supervisión (Supervision); Validación (Validation); Visualización (Visualization); Redacción - preparación del borrador original (Writing – original draft); Redacción - revisión y edición (Writing – review & editing).

---

adelante relevamientos y mapas cualitativos juntos a los profesionales antes mencionados.

## Declaración de financiamiento

Proyecto de Investigación PICT 2021-I-A- 00628 “Lógicas socio-espaciales y políticas públicas de producción del hábitat en asentamientos informales del Gran San Miguel de Tucumán, Noroeste Argentino (2015-2023)” financiado por AGENCIA I+D+i - MINCYT.

## Referencias bibliográficas

- Barreto, M. Á., D'Ottaviano, C., Alcalá, L., Fernández, M. E., Pelli, M. B. y Romagnoli, V. (2014). Las cooperativas de trabajo en la Política Federal de Vivienda. Una experiencia del Programa Federal Emergencia Habitacional en Resistencia (Argentina). En M. A. Benítez & M. Zuquim (Eds.), *Práticas Recentes de intervenções contemporâneas em cidades da América Latina*. (pp. 13-48). FAU.
- Bazán, A. R. (1992). *El Noroeste y la Argentina contemporánea (1853-1992)*. Editorial Plus Ultra.
- Boldrini Peralta, P. L. (2011). *Estudio del vínculo arquitecto – comunidad: experiencia de trabajo con una organización barrial en Tucumán* [Tesis de Maestría en Psicología Social, orientación en Grupos e Instituciones,]. Universidad Nacional de Tucumán.
- Boldrini Peralta, P. L. (2012). *Producción participativa del hábitat popular en el área metropolitana de S. M. de Tucumán* [Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales con orientación en geografía]. Universidad Nacional de Tucumán.
- Boldrini Peralta, P. L. (2015). Producción Participativa del Hábitat Popular. Aportes metodológicos a partir del estudio del Gran San Miguel de Tucumán 2000-2010. *Estudios Del hábitat*, 13(1), 61-75.
- Boldrini Peralta, P. L. (2018). Informalidad en el Gran San Miguel de Tucumán. En *La ciudad (re) negada. Aproximaciones al estudio de asentamientos populares en nueve ciudades argentinas* (pp. 291-319). Universidad General Sarmiento UNGS.
- Boldrini Peralta, P. L., Malizia, M. y Ortega, M. (2021). Políticas Públicas de mejora del hábitat en barrios populares de Tafi Viejo, Tucumán. Un caso de gestión Municipal. En M. Á. Barreto & E. R. Abildgaard (Eds.), *II Encuentro Red de Asentamientos Populares-ENRAP: pandemia, crisis y oportunidades para el hábitat popular*. Editorial FAU-UNNE.
- Cravino, M. C. (2021). Activismo legislativo en contexto neoliberal: la sanción de la Ley de Regularización de Asentamientos Populares en Argentina en el año 2018. En *Propriedades em transformação 2: expandindo a agenda de pesquisa* (pp. 81-100,). Blucher.
- Dallorso, N. (2012). Notas sobre el uso del concepto de dispositivo para el análisis de programas sociales. *Espiral*, 19(54), 43-74.

- Durante, M. E., Breide, J. M., Beatriz, P., Contreras, M., Ferlicca, F., Venturini, J. P. y Apaolaza, R. (2022). Trabajo interdisciplinario y saberes populares: la Comisión de Urbanismo de la Recuperación de Tierras de Guernica. *Memorias del XVIII Encuentro de Geografías de América Latina y VIII Congreso Nacional de Geografía de Universidades públicas de la República Argentina: construyendo saberes emancipatorios desde y para América Latina*, 2, 257-258.
- Elorza, A., Alvarado Rodríguez, M. y Monayar, M. V. (2019). ¿Concesión estatal o conquista social? El Registro Nacional de Barrios Populares como política social frente a la cuestión habitacional en la ciudad de Córdoba, Argentina. *Cuaderno Urbano. Espacio, Cultura, Sociedad*, 26(26), 49-68. <https://doi.org/10.30972/crn.26263790>
- Gómez López, C., Cuozzo, R. L. y Boldrini Peralta, P. (2015). Impactos de las políticas públicas de hábitat en la configuración del espacio urbano entre 2003 y 2013. El caso del área metropolitana de Tucumán, Argentina. *Cuaderno Urbano*, 19(19), 153-178. <https://doi.org/10.30972/crn.1919858>
- Guevara, T., Marigo, P. y Wallace, J. (2018). Integración urbana y políticas públicas: el caso del registro nacional de barrios populares de Argentina: Decreto N° 358/2017. *Oculum Ensaíos*, 15(3), 455-473. <https://doi.org/10.24220/2318-0919v15e2018a4183>
- Hernández García, J. (2005). Participación y hábitat: ¿Sueño posible o relación no deseada? *Revista INVI*, 20(55), 48-81.
- Kaminker, S. A. y Velásquez, R. Y. (2015). Programa de mejoramiento de barrios en la patagonia central: regularización de la informalidad urbana en Puerto Madryn, Chubut. *Cuaderno urbano*, 18(18), 89-110.
- Malizia, M., Boldrini Peralta, P. y Paolasso, P. (2018). *Hacia otra ciudad posible. Transformaciones urbanas recientes en el aglomerado Gran San Miguel de Tucumán*. Café de las Ciudades.
- Malizia, M., Castañeda Nordmann, A. y Cuozzo, R. (2021). El uso de mapas cualitativos para la integración urbana: el caso de un barrio popular del Aglomerado Gran San Miguel de Tucumán (noroeste argentino). *Cuadernos Geográficos*, 60(2), 126-146. <https://doi.org/10.30827/cuadgeo.v60i2.15819>
- Marengo, C. y Elorza, A. L. (2009). Globalización y políticas urbanas. La política habitacional focalizada como estrategia para atenuar condiciones de pobreza urbana: los programas implementados en Córdoba y los desafíos pendientes. *Cuaderno Urbano. Espacio, Cultura, Sociedad*, 8(8), 7-33.
- Meny, Y. y Thoenig, J.-C. (1992). *Las políticas públicas*. Ariel.
- Miño, F., Carrara, G., Monticelli García, F. y Pastoriza, V. (2023). Una política desde y para los barrios populares. En *La experiencia del Registro Nacional de Barrios Populares. De la organización popular a una política de Estado* (pp. 40-70). Universidad Nacional de Quilmes.
- Neiman, G. y Quaranta, G. (2006). Los estudios de caso en la investigación sociológica. En I. Gialdino (Ed.), *Estrategias de investigación cualitativa* (pp. 213-298). Gedisa.

- Ortiz Flores, E. (2002). La producción social del hábitat ¿opción marginal o estrategia transformadora? En *Vivitos y coleando. 40 años trabajando por el hábitat popular de América Latina*. Universidad Autónoma Metropolitana.
- Osatinsky, A. (2019). Ocupación y problemas de empleo en el Gran Tucumán - Tañ Viejo en 2003-2015. *Breves Contribuciones del IEG*, 31, 3-31.
- Oszlak, O. y O'Donnell, G. (1995). Estado y políticas estatales en América Latina: Hacia una estrategia de investigación. *Redes - Universidad Nacional de Quilmes*, 2(4), 99-128.
- Paolasso, P., Longhi, F. y Velázquez, G. (2019). *Desigualdades y fragmentación territorial en la Argentina durante la primera década del siglo XXI* (Vol. 320). Ediciones Imago Mundi.
- Pelli, V. S. (1995). Pobreza Habitacional e Iniciativas Gubernamentales y no Gubernamentales. En *Seminario Internacional «Política habitacional en Argentina, reestructuración global y desarrollo sustentable»*. UBA - Universidad de Buenos Aires.
- Reboratti, C. (2001). Una cuestión de escala: sociedad, ambiente, tiempo y territorio. *Universidade Federal do Rio Grande do Sul Porto Alegre - Rev. Sociologias*, 3(5), 80-93. <https://doi.org/10.1590/S1517-45222001000100005>
- Romagnoli, V. y Barreto, M. A. (2006). Programas Mejoramiento Barrial. Reflexiones sobre fundamentos y pertinencia de sus objetivos a partir de un análisis del PRO-MEBA (Argentina) y su implementación en la ciudad de Resistencia (provincia del Chaco). *Cuaderno Urbano. Espacio, Cultura, Sociedad*, 5, 151-176.
- Sosa Martos, A. (2015). Dictadura y represión: el primer cierre de los talleres ferroviarios de Tañ Viejo, Tucumán 1980. *Revista testimonios*, 4(4), 1-20.
- Yuni, J. y Urbano, C. (2014). *Técnicas para investigar: Recursos metodológicos para la preparación de proyectos de investigación*. Editorial Brujas.